

Santiago, diecinueve de octubre de dos mil veintitrés.

**VISTOS:**

En causa RUC N° 2210054893-7, RIT N°390-2023 el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, por sentencia de catorce de agosto del año en curso, condenó a Manuel Humberto Aguilar Oyarzún, a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, más el pago de una multa de un tercio de unidad tributaria mensual, accesorias legales y toma de huella genética, sin costas, por su responsabilidad como autor del delito de tráfico ilícito de drogas y sustancias estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3 en relación con el artículo 1, ambos de la Ley 20.000, perpetrado el 28 de octubre de 2022, pena privativa de libertad que deberá ser cumplida de manera efectiva.

En contra de la decisión condenatoria, la defensa interpuso recurso de nulidad, el que fue conocido en la audiencia pública celebrada el veintinueve de septiembre último, disponiéndose -luego de la vista- la notificación del presente fallo vía correo electrónico a los intervinientes, según consta del acta levantada en su oportunidad.

**Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el recurso de nulidad se funda en la causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, en relación con lo preceptuado en los numerales 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; en cuanto estima vulnerados su derecho a intimidad, a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar.

Explica que la vulneración se manifiesta en la entrada y registro efectuada por los funcionarios policiales a la habitación del acusado, en la que se encuentra



la droga que sirve de fundamento para la condena, pues quedó establecido en la sentencia recurrida que la droga se encontró en un dormitorio y que éste correspondía al de su representado, fundándose en la autorización dada por el dueño del inmueble.

Agrega que el inmueble ubicado en calle Estación N° 23, se trata de un recinto cercado, que cuenta con un patio delantero, en el que al fondo se encuentra un inmueble en el que habita Edwin Zarricueta- su padrastro- y dos piezas ubicadas a cada uno de sus costados, dependencias que cuentan con entradas independientes.

Refiere que, conforme a ello, para proceder a la entrada y registro de la habitación donde se encontró la droga, debía solicitarse la autorización a su morador y no al propietario del inmueble, considerando que, la presencia de los funcionarios policiales en el lugar, fue motivada por la detención previa de unas personas quienes se trasladaban en un vehículo, los que habrían realizado una parada -previo a su detención- en el domicilio de su representado, saliendo del lugar con una bolsa de nylon color café, la que contenía droga.

Sostiene que la conexión que realizan los funcionarios con su representado se basa en meras presunciones y que nunca existieron signos evidentes de la comisión de un delito; ello por cuanto no se contó con ninguna prueba que diera cuenta que las personas que se acercaron al lugar mientras se efectuaba la vigilancia, hayan concurrido a comprar drogas, pues a ninguno de ellos se los controló instantáneamente, de manera que, la comercialización de estupefacientes durante “la mantención de la flagrancia”, al decir de los policías, se basa en meras suposiciones



Indica que lo que procedía hacer, era efectuar la detención a que se refiere el artículo 129 del Código Procesal Penal. Sin embargo, ello no sucedió, gestándose una investigación discrecional por parte de Carabineros, quienes procedieron al ingreso y registro de la propiedad de su representado sin encontrarse éste presente, en circunstancias de que correspondía y era imprescindible la autorización del morador del dormitorio o, en subsidio del juez competente y no del propietario, respecto del cual alega, tampoco se acreditó su dominio, por lo que estima que, la actividad de los funcionarios policiales no se sustenta en ninguna de las hipótesis de los artículos 205 y 206 del Código Procesal Penal, resultando ilegítima por perturbar y restringir garantías fundamentales fuera de los casos y sin cumplir los requisitos previstos por la ley.

Concluye solicitando se declare la nulidad del juicio oral y de la sentencia, debiendo excluir la totalidad de las pruebas que menciona y se disponga la realización de un nuevo juicio por el tribunal no inhabilitado.

**SEGUNDO:** Que, para efectos de acreditar las circunstancias que justificarían la causal de nulidad alegada, la defensa rindió en la oportunidad procesal correspondiente, como prueba copia del acta de autorización de entrada y registro, de fecha 28 de octubre de 2022.

**TERCERO:** Que, en lo concerniente a la infracción al debido proceso, cabe indicar que esta Corte ya ha señalado que la Constitución Política de la República consagra un derecho que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19 N° 3°, inciso sexto, le confiere al legislador el deber de definir las garantías de un procedimiento racional y justo.



Sobre los presupuestos básicos que tal derecho supone, se ha dicho también por este tribunal que lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales; que sean escuchados; que puedan reclamar cuando no están conformes; que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

**CUARTO:** Que, al ser objeto del recurso la invocación de la defensa del condenado, el respeto y protección de la vida privada, en relación con el ingreso al dormitorio del imputado y la obtención de evidencias, resulta preciso anotar que esta Corte también ha señalado que la negativa a admitir prueba ilícita tiene como fundamento la concepción del proceso como instrumento de resolución jurisdiccional de litigios dentro del ordenamiento jurídico, lo que conduce a que todo acto que infrinja dicho sistema debe ser excluido del mismo.

En este sentido, Hernández Basualto afirma que “el Estado está obligado de modo especial a velar por el irrestricto respeto de las garantías fundamentales y a evitar sin más los efectos ilegítimos de los atentados de que son objeto, (...) de no verificarse la exclusión de la prueba obtenida con inobservancia de tales garantías fundamentales el Estado estaría usando como fundamento de una eventual condena el resultado de una vulneración constitucional” (La exclusión de la prueba ilícita en el nuevo proceso penal chileno, Héctor Hernández Basualto, Colección de Investigaciones Jurídicas, Universidad Alberto Hurtado, año 2005, N° 2, p.p. 65-66) (SCS 23.930-2014).



**QUINTO:** Que, a fin de dirimir lo planteado en el recurso, desde que las circunstancias que motivaron el posterior ingreso a la habitación del acusado Manuel Humberto Aguilar Oyarzún, fueron materia de prueba y debate en el proceso, es menester estarse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, intente una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal.

Lo contrario implicaría que este tribunal de nulidad, únicamente de la lectura de los testimonios “extractados” en la sentencia, podría dar por acreditados hechos distintos y opuestos a los que los magistrados extrajeron de esas deposiciones, no obstante que estos últimos apreciaron íntegra y directamente su rendición, incluso el examen y contra examen de los contendientes, así como hicieron las consultas necesarias para aclarar sus dudas, lo que de aceptarse, simplemente transformaría a esta Corte, en lo atinente a los hechos en que se construye esta causal de nulidad, en un tribunal de segunda instancia, y todavía más, en uno que -a diferencia del a quo- dirime los hechos en base a meras actas o registros -eso es sino el resumen de las deposiciones que hace el tribunal oral en su fallo-, lo cual, huelga explicar, resulta inaceptable.

Aclarado lo anterior, se procederá al estudio de las protestas fundantes del recurso con arreglo a los hechos que en la decisión se tienen por demostrados.



**SEXTO:** Que resulta relevante señalar que la sentencia impugnada consignó los presupuestos de hecho que se tuvieron como establecidos, consistentes en que *“El 28 de octubre de 2022, a eso de las 12:20 horas aproximadamente, en circunstancias que Carabineros realizaba labores preventivas en Pozo Almonte, observó que en el vehículo placa patente BRKJ-63, en que se trasladaban diversos ocupantes, en inmediaciones al N° 23 de calle Estación de Pozo Almonte, uno de los sujetos se bajó e ingresó al inmueble, luego, sale en compañía del acusado Manuel Aguilar Oyarzun, trayendo el ocupante del móvil una bolsa, subiendo al vehículo y saliendo del lugar, siendo seguidos e intentando controlar por Carabineros en calle 21 de mayo, sin embargo, al advertir la presencia policial se dieron a la fuga, lanzando por la ventana del móvil lo que resultó ser 1.135 gramos de marihuana.*

*Consecuentemente, personal policial concurrió al domicilio ubicado en calle Estación N° 23, Pozo Almonte, donde con autorización del dueño del inmueble, se ingresó, encontrándose que en el dormitorio correspondiente al acusado Manuel Humberto Aguilar Oyarzún guardaba, 81 paquetes contenedores de una sustancia que resultó ser marihuana, con un peso neto de 82.301 gramos”. (sic).*

Estos hechos fueron calificados como un delito consumado de delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y castigado en el artículo 3 y 1 de la Ley 20.000.

**SÉPTIMO:** Que una vez sentado lo anterior, conviene tener presente que en la especie, la defensa ha cuestionado la efectividad de haber sido dada la autorización de entrada y registro por el propietario o encargado del inmueble, lo



que implica que todas las pruebas derivadas de tales diligencias son ilícitas y, por ende, debieron ser valoradas negativamente por los juzgadores de la instancia.

**OCTAVO:** Que, al respecto, la sentencia en su motivo décimo expresa *“Como en parte se aludiera en el veredicto, se desestima la alegación de la defensa, en lo medular, porque de los elementos de prueba rendidos en juicio, se desprende que el ingreso al domicilio se encuentra cubierto por el artículo 206 del Código Procesal Penal, desde que del relato del testigo de cargo, se observa que existe conexión funcional en el procedimiento policial efectuado, desde lo observado inicialmente, la persecución realizada, el arribo al domicilio, la obtención de la autorización de ingreso, el ingreso mismo y el hallazgo de los alcaloides en el dormitorio del acusado; por lo demás, aparece que el dueño del inmueble autorizó la diligencia, sin que en la especie se hubiere probado suficientemente por la defensa, ni emanare de la prueba de cargo, que en el acto se atentare en contra de la inviolabilidad del hogar, al desprenderse que se trata de una sola casa habitación compartida por diversas personas con distintas dependencias.*

*En efecto, teniendo presente el hilo conductor al que se ha hecho referencia, entendiéndose que se advirtió por personal policial que el vehículo observado se detuvo a las afueras de un domicilio, desciende el copiloto, interactúa con otro sujeto, volviendo el copiloto con una bolsa, para subir nuevamente al sector del copiloto del vehículo, luego, se intentó una fiscalización policial, se produce una persecución, percibiéndose policialmente que desde la ventana del copiloto se arroja una sustancia vegetal, luego, se alcanza el móvil, se observa en el sector del copiloto sustancia vegetal, después se encuentra la bolsa*



arrojada, marcando positivo a THC; entonces, no pueden dejar de vincularse estos episodios, con lo cual, se estima que aun soslayando la autorización obtenida, aparece, que el ingreso y registro al dormitorio del acusado se corresponde con la norma aludida, porque los acontecimientos percibidos policialmente se adecúan a la posibilidad de concurrir frente a signos evidentes que indicaren que en el recinto -en este caso, el inmueble correspondiente a calle Estación N° 23-, se estaba cometiendo un delito, porque se entiende que es desde ese inmueble (o inmediaciones al mismo) que se percibe salir el copiloto (que poco antes había descendido del vehículo fiscalizado) con una bolsa, que finalmente en su interior pudo luego descubrirse que tenía sustancias ilícitas; apreciándose entonces, un actuar policial cubierto por la norma en análisis, además de avizorarse una situación que también se estima se corresponde con una hipótesis de flagrancia, porque de los elementos extraíbles del relato de testigo, se desprende que los distintos hitos que finalmente devinieron en el arribo al dormitorio registrado, hallazgo de la droga y detención del acusado, ocurrieron en horas de la tarde del 28 de octubre de 2022 (aproximadamente, pasadas las 12 horas y hasta alrededor de las 12:50 horas de ese día)”.

En el mismo sentido, los juzgadores del grado desestimaron, en cuanto a la autorización cuestionada, que “como también se aludió (en parte); de los antecedentes aparece que en este caso se pidió y se obtuvo por quien se presentó como el propietario del inmueble; ahora bien, en cuanto las particularidades del inmueble, debe destacarse que de los elementos de juicio, incluso la declaración del imputado (quien en lo pertinente manifestó que la casa del fondo es la de su padrastro, a mano derecha está su dormitorio, que está





*separado del domicilio de su papá, después sigue otra casa al lado de su dormitorio, que está separado del domicilio de su papá, después, sigue otra casa al lado de su dormitorio que es la casa de su otro hermano, y, frente a esas dos, al lado izquierdo hay otra casa que es de su otro hermano), se advierte, que es un inmueble familiar, es decir, un bien ocupado por personas que comparten algún vínculo o relación de tal naturaleza, no se trata entonces, de un hotel, residencial o similar; además, de las imágenes exhibidas, particularmente las correspondientes al dormitorio del acusado, si bien pudiere apreciarse que tenía cierta separación con las otras dependencias, lo concreto, es que se entendió que la habitación estaría dentro de los deslindes del mismo inmueble, sin advertirse que el dormitorio del acusado contare, en sí mismo, con dependencias que comúnmente un hogar o domicilio requiere para que sus moradores cubran sus necesidades vitales, así, por ejemplo, no se percibió que el dormitorio del acusado tuviera cocina o baño, sino que de las imágenes exhibidas, y, en lo pertinente, se percibió en el interior de la dependencia, elementos tales como una especie de ropero, velador, cama. Así entonces, cuando la defensora en su alegato inicial plantea que “aunque el titular del dominio del inmueble haya entregado la autorización, el titular de la morada que registra es el de su representado cuyo consentimiento expreso ha debido recabarse para entrar al recinto”, lo concreto, es que en este estado de análisis, no se desprende concurrente la infracción argüida”.*

*Agrega el fallo que “Además, del relato del testigo Moraga Leiva, particularmente ante una de las preguntas de la defensa, se entendió que la puerta del dormitorio estaba abierta; por otro lado, si bien se estimó innecesario*



*plantearlo en los hechos establecidos, al interior del dormitorio se encontraron, además de las sustancias, un rifle y un revolver, el primero a postones y el segundo de juguete; por lo que en razón de todos los elementos razonados, es que de la ponderación de los elementos de juicio no se refleja que en la especie se atentare en contra del derecho reclamado, esto es, la inviolabilidad del hogar o domicilio”.*

**NOVENO:** Que, de la sola lectura de los hechos que se dieron por establecidos soberanamente en la sentencia aparece de manifiesto que el actuar de los funcionarios policiales se ajustó a Derecho, toda vez que los jueces del tribunal oral situaron las condiciones suficientes para el ingreso y registro legítimo por parte de los funcionarios aprehensores a la habitación del acusado.

En efecto, los citados jueces han considerado que se produjo una situación de flagrancia, enmarcando su actuación en lo dispuesto en el artículo 206 del Código Procesal Penal que permite a los funcionarios policiales la entrada y registro de un lugar cerrado, sin el consentimiento expreso de su propietario ni autorización judicial previa, cuando *“otros signos evidentes indicaren que en el recinto se está cometiendo un delito”*, hipótesis fáctica que, como ya se dijo, resulta inamovible para esta Corte en atención a la naturaleza del motivo de nulidad en análisis, de modo que la prueba de cargo obtenida en virtud del ingreso y registro a la habitación del sentenciado, no puede calificarse de ilícita.

A mayor abundamiento y compartiendo lo sostenido por los sentenciadores, del mérito de los antecedentes y la propia declaración del acusado, se advierte que el domicilio al que ingresaron los funcionarios policiales corresponde a una vivienda familiar, es decir, no se trata de un lugar destinado a un fin distinto que al



de servir de morada a personas que forman parte núcleo familiar, de modo que resulta suficiente la autorización del propietario del bien para su registro, siendo irrelevante que dicha dependencia contara con entrada independiente, pues lo cierto, es que al tenor de los antecedentes, se acreditó que dicha construcción era colindante con la casa principal.

**DECIMO:** Que, del análisis precedente, cabe estimar que al actuar del modo que lo hicieron, los funcionarios policiales no transgredieron, en el caso concreto, las garantías constitucionales de intimidad, privacidad ni de inviolabilidad del hogar aludidas como infringidas por el arbitrio en revisión, por lo que es forzoso concluir que los jueces del tribunal oral no incurrieron en vicio alguno al aceptar con carácter de lícita la prueba de cargo obtenida por la policía en las referidas circunstancias y que fuera aportada al juicio por el Ministerio Público, de manera que el recurso debe ser íntegramente desestimado.

**UNDECIMO:** Que, finalmente, la prueba rendida por la defensa en estos estrados, consistente en el acta de entrada y registro, en nada alteran las conclusiones a las que se ha arribado por esta Corte.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373 letra a), 377 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa del condenado **Manuel Humberto Aguilar Oyarzún** en contra de la sentencia de catorce de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, y en contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RIT N° 390-2023, RUC N° 2210054893-7, los que, en consecuencia, no son nulos.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Morales.

Regístrese y devuélvase.



**Rol N° 207.723-2023**

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavorari G. y Eduardo Morales R. No firman los abogados integrantes Sra. Tavorari y Sr. Morales, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar ambos ausentes.



En Santiago, a diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

